

# Sección latinoamericana

## ASUNTOS GENERALES

### El BID en una etapa crucial

En la XVII Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada del 17 al 19 de mayo último en Cancún, Quintana Roo, se reflejaron inconformidades respecto a la orientación de los créditos otorgados por el directorio del organismo; se señaló la necesidad de examinar la política operativa de la institución y la clasificación de los países para propósitos crediticios; se informó del próximo ingreso de naciones desarrolladas extrarregionales, que en conjunto aportarán 745 millones de dólares al capital del BID, y se pidió mayor participación del Banco en el financiamiento del desarrollo de América Latina.

En el informe rendido a la Asamblea se señala que se concedieron 70 préstamos por un total de 1 375 millones de dólares. La distribución por sectores de esta suma fue como sigue: 24% al sector agrícola; 22% a proyectos de energía eléctrica; 22% a comunicaciones y transportes; 14% a industria y minería; 8% a obras de saneamiento; 5% a educación; 3% a desarrollo urbano, y 2% a exportaciones, proyectos de preinversión y desarrollo turístico.

Se informó también que el BID elevará sus recursos a 18 000 millones de dólares aproximadamente, 6 000 millo-

nes más de los que ha estado manejando. Así, pues, se recomendó a los países miembros que adopten las medidas necesarias para lograr este aumento. Entre las medidas tendientes a obtener recursos adicionales se cuentan el establecimiento de un fondo de fideicomiso por 500 millones de dólares proporcionados por Venezuela y la obtención de 365 millones de dólares en los mercados de capital.

Para el secretario adjunto del Tesoro norteamericano, Gerald Parsky, el Banco Interamericano de Desarrollo debería brindar apoyo al sector privado mediante sus operaciones de préstamo, en lugar de financiar las exportaciones. Estas deben dejarse al libre juego del mercado, o a los comerciantes y banqueros del sector privado. Dijo que éstos deben recibir apoyo del BID, para su expansión, toda vez que la iniciativa privada constituye un elemento de auxilio para el desarrollo de los pueblos. El sector privado es la fuente más importante del capital externo de América Latina, ya que tan sólo el año pasado las tres cuartas partes de los flujos de recursos netos hacia la región provinieron de fuentes privadas. También instó al Banco a darle la más alta prioridad a la ampliación de sus arreglos con el grupo empresarial, en cuanto a proporcionar financiamientos se refiere. Según él, esto contribuirá ampliamente al desarrollo de los países miembros, a mejorar su acceso a los mercados internacionales de capital, así como a introducir en la región instituciones privadas que normalmente no desarrollan sus actividades en Latinoamérica. Piensa Parsky que los esfuerzos deben hacerse para mantener y aumentar las corrientes comerciales y financieras dirigidas por las fuerzas del mercado.

Para el ministro de Hacienda brasileño, Mario Henrique Simonsen, se debe postular en principio el planteamiento de un nuevo orden económico mundial pero habrá que esperar algunos años. Señaló que es evidente que la nueva configuración mundial de las balanzas de pagos exige que el BID proporcione un mayor financiamiento para el desarrollo a América Latina.

Según palabras del secretario de Hacienda mexicano, Mario Ramón Beteta, el panorama actual del financiamiento internacional a países en vías de desarrollo presenta serios deterioros y limitaciones, originados por el desajuste monetario internacional surgido a principios de este decenio, la rápida elevación de los precios del petróleo y de los productos industriales y la escasez generalizada de alimentos. En relación con las actividades del BID señaló lo siguiente:

“Estamos totalmente de acuerdo en la conveniencia de apoyar con carácter prioritario a las economías nacionales con mayor debilidad relativa. Sin embargo, debido a que todos los países en vías de desarrollo necesitan cantidades cada vez mayores de crédito en condiciones favorables, los organismos financieros regionales como el BID tienen el imperativo de acrecentar sus recursos adecuándolos a los requerimientos de sus países miembros.

“Nuestro banco tiene que redoblar en los próximos años sus acciones flexibles y ágiles, imaginativas y planeadas para mejorar sus políticas de captación de nuevos recursos y de otorgamiento de préstamos, en su carácter de importante promotor de la integración regional. Nada que sea posible debe dejar de hacerse

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en los casos en que así se manifieste.

frente a los imperativos del atraso y la pobreza.

"Entre las políticas para aumentar los recursos del organismo, es conveniente persistir en la relativa al ingreso de países extrarregionales. También es necesario concretar y ampliar los acuerdos adoptados en la Asamblea de 1975 para engrosar los recursos ordinarios del Banco y los del Fondo de Operaciones Especiales."

"La función catalizadora que ha emprendido el BID para facilitar el acceso de sus países miembros a los mercados de capital, es asimismo importante, especialmente para algunos de ellos. Sin embargo, esta acción en momento alguno debe sustituir o limitar la presencia directa del Banco en dichos mercados, ni tampoco debe repercutir negativamente sobre las operaciones propias de los países que ya están acudiendo a esos mercados en busca de recursos.

"Por otra parte, será conveniente que la administración del BID busque mecanismos para invertir sus reservas líquidas entre los países en vías de desarrollo que lo integran, con el objeto de promover sus mercados internos de capital y al mismo tiempo permitirles ampliar el volumen de recursos destinados a cubrir sus programas de desarrollo.

"También es indispensable sistematizar el campo de acción del organismo, tomando en cuenta la variedad de actividades que ha realizado a lo largo de su existencia, y que sus recursos son cada vez más limitados frente a las necesidades del desarrollo de la región.

"Hasta hace algunos años la programación sectorial no resultaba demasiado complicada, se basaba en lo que indicaban las solicitudes de los países y en los estudios y experiencias de la administración del Banco. Hoy existen más dificultades y sin embargo siempre será conveniente que haya adecuación entre los sectores que los países prestatarios desean atender y la programación sectorial efectuada por el Banco.

"A mi juicio, los funcionarios gubernamentales encargados de los diferentes sectores productivos y sociales de los países miembros tienen una visión más clara de las necesidades y sus posibles soluciones. ¿Quién si no las entidades que programan la inversión dentro de un Estado conocen cabalmente la interrela-

ción que existe entre todos los sectores económicos?

"A este respecto deseo reiterar que sólo es posible alcanzar el verdadero desarrollo integral si se toman como base las prioridades establecidas por los países miembros. El auxilio internacional no es, por ningún concepto, sustituto de la soberanía nacional sino una forma de enriquecerla practicando el respeto y la solidaridad."

"Por otra parte, para que el Banco desempeñe el papel predominante que le corresponde en el financiamiento de la región, es indispensable que se clarifiquen y se definan plenamente sus políticas operativas tomando en cuenta, de manera creciente, los criterios y las propuestas de los países que lo integran.

"Son ya tantas y tan diversas las políticas y prácticas que adopta el Banco para realizar sus operaciones, que ha llegado el momento de que, en su diseño y aplicación, el Directorio Ejecutivo se apoye más en los mejores elementos de interpretación, como son los que se desprenden de las exposiciones de los señores gobernadores, de las instrucciones concretas que recibe de los países y de los razonamientos de los directores.

"Deseo sugerir específicamente que el Directorio Ejecutivo estudie y reexamine las políticas sobre licitación internacional, costo de proyectos, uso de monedas, financiamiento de programas y distribución de riesgo cambiario, evitando en todo caso cualquier discriminación entre los países miembros.

"Por lo que se refiere a la integración regional, deseo felicitar a la administración del BID por su labor encaminada no sólo a la consolidación de instrumentos estrictamente latinoamericanos, sino además el acercamiento con los jóvenes estados del Caribe, zona que por razones históricas y geográficas no puede aislarse de nuestro Continente. Ejemplos de lo anterior son el ingreso al BID de países caribeños independientes y el apoyo que se ha planteado al Banco de Desarrollo del Caribe.

También son dignos de mención los esfuerzos del Banco para promover la cooperación técnica, a través de un nuevo mecanismo en el que los mismos países miembros intercambiarán prácticas y conocimientos, lo que además de coadyuvar a estrechar sus lazos propicia-

rá la creación de una tecnología regional, que, como bien se ha dicho, tendrá las dimensiones y las modalidades que los propios países quieran darle."

Por su parte, Antonio Ortiz Mena, presidente del BID, señaló en su informe que la mayoría de los países latinoamericanos han concentrado su desarrollo económico en su proceso de industrialización que muchas veces se ha realizado con sacrificio del sector rural. Por ello la producción agropecuaria ha quedado a la zaga y parte importante de la fuerza de trabajo emigra del campo a la ciudad contribuyendo a un desorbitado crecimiento de la población urbana. Ortiz Mena planteó la posibilidad de que el BID otorgue créditos para la educación superior con el propósito, entre otros, de hacerla más accesible a estudiantes de bajos ingresos. Además informó que en julio próximo se firmará el protocolo mediante el cual 12 países extrarregionales ingresarán como miembros al Banco.

El representante de Perú censuró duramente algunos aspectos de la política del BID. Roberto Keil Rojas dijo que el Banco no apoya programas industriales que ayuden a la integración económica de la región. El apoyo de la institución, dijo, no debe circunscribirse a la infraestructura física; afirmó que es notoria la ausencia de financiamiento en el sector industrial. Puso como ejemplo al Grupo Andino que no tiene todavía un solo proyecto financiado para la programación de la industria automotriz, metalmeccánica o petroquímica. Le parece injusto que a los países de menor desarrollo relativo se asignen porcentajes marcadamente menores que al resto. Keil Rojas señaló la incapacidad institucional del BID en la selección de productos, aplicando criterios aferradamente legalistas y con acciones que están fuera de las instrucciones y los acuerdos tomados por el organismo. Para él, el sector de desarrollo urbano debería exhibir mayores cifras en la cartera de préstamos de la institución y señaló que amplios sectores de proyectos destinados a este fin, quedan fuera de programación y financiamiento. Para Keil Rojas el BID ha discriminado a países de desarrollo intermedio dentro de la región, como Perú, Colombia y Chile.

Según Héctor Hurtado, ministro de Finanzas de Venezuela, para conseguir la integración de América Latina, es necesaria una mayor participación del BID, por ejemplo, en el financiamiento de

empresas multinacionales latinoamericanas. Estas empresas requerirán de financiamiento por parte de instituciones y países que valoren la importancia del desarrollo conjunto y del aprovechamiento de los recursos naturales que posee la región. Asimismo defendió el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y solicitó buscar nuevos caminos de integración.

Para Bolivia la política de financiamiento del BID es desequilibrada, pues en vez de disminuir, aumenta las diferencias entre los países de la región. Carlos Calvo, ministro de Finanzas de Bolivia, exigió el fiel cumplimiento de las normas de tratamiento preferencial, de acuerdo con la política del Fondo para Operaciones Especiales.

Los países centroamericanos y del Caribe propusieron el establecimiento de condiciones más favorables para el financiamiento a los países de menor desarrollo relativo y mercado limitado, y la orientación de recursos de carácter no reembolsable a proyectos de cooperación técnica.

En el informe se señala que, de los prestatarios del BID, el principal es Brasil seguido de Argentina, México y Guatemala. De los 23 miembros de Latinoamérica, todos, excepto Venezuela y Trinidad y Tabago, recibieron préstamos del BID. Venezuela pasó a ser desde 1974 país aportante exclusivamente. En el cuadro siguiente se señalan los ocho países que recibieron más crédito durante 1975, en miles de dólares.

Brasil	269.5
Argentina	201.1
México	167.3
Guatemala	120.6
Colombia	75.8
Chile	70.7
Bolivia	54.1
Ecuador	43.7

En este sentido, el representante de Perú señaló como inaceptable el hecho de que a la postre todo incremento en los préstamos en favor de los países subdesarrollados y de mercado insuficiente, se haga exclusivamente a costa de los tres países de desarrollo intermedio. Así, pidió que la clasificación de los países se revise, pues hasta ahora ha sido arbitraria. El representante de Bolivia señaló que no debe olvidarse que entre los mismos países en vías de desarrollo existen notables diferencias reconocidas

en la clasificación que tiene el Banco para el otorgamiento de créditos. Afirmó que en los 16 años de existencia del organismo 51% de los fondos han ido a los países más adelantados (clasificados en el grupo "A") y un porcentaje mucho menor, 31%, a los 15 países clasificados en C y D. Además, la programación para el presente año muestra que los países del grupo A (Argentina, Brasil y México únicamente) van a recibir el 46% de los créditos. Esto quiere decir que hay 18 países que recibirán el 54%, por lo que existe un visible desequilibrio en la cartera de préstamos del Banco.

En fin, el Grupo Andino, el Banco de Desarrollo del Caribe, y los países centroamericanos, solicitaron mayor financiamiento y condiciones más favorables.

La cuestión fundamental es saber si el BID va a modificar las políticas seguidas hasta ahora. En este sentido valdría la pena preguntarse si los 745 millones de dólares que aportarán el Reino Unido, República Federal de Alemania, Italia, Suiza, Dinamarca, Holanda, Austria, España, Bélgica, Japón, Yugoslavia e Israel, cuando ingresen al BID como miembros extrarregionales, servirán para canalizarse a los países que más lo necesiten de acuerdo con la idea de fomentar realmente el desarrollo de la región. O, contrariamente, estos recursos permitirán fundamentalmente —de acuerdo con la sugerencia general de Estados Unidos— la penetración de capitales privados que aten cada vez más las posibilidades de independencia económica de América Latina. □

## BOLIVIA

### La agitación social crece

Los acontecimientos del semestre pasado —según se afirma— pueden conducir al país, en un plazo más o menos breve, a una serie de mutaciones en el terreno político, cuya importancia interna y sus posibles repercusiones en el desenvolvimiento de la región mantienen el interés de los especialistas en la materia.

Tal como lo describen los observadores este nuevo jalón de la historia boliviana se asienta en varios elementos íntimamente ligados entre sí: las dificultades económicas por las que ha atravesado el país en los años recientes y que,

según algunas estimaciones, se agravaron durante 1975; el permanente clima de agitación social de los últimos meses, reflejado principalmente en los medios sindicales y universitarios, acompañado de un creciente estado de represión por parte del Gobierno, ante la imposibilidad de controlarlo por otros medios; la escisión del Ejército porque algunos sectores militares acusan al Gobierno de entreguista y de excesiva dependencia respecto de Estados Unidos y el rápido deterioro de la figura del general Hugo Bánzer, por el conjunto de problemas socioeconómicos y políticos y por la aceptación de negociar, a partir de las condiciones de la Junta Militar chilena, una salida al mar para Bolivia. A todos estos elementos básicos hay que agregar el asesinato del ex-presidente general Juan José Torres, predecesor de Bánzer, ocurrido recientemente en Argentina, el cual se convirtió en el "detonador de la volcánica insurgencia interna" que caracteriza a la etapa actual de la vida política boliviana.

Desde 1971 el gobierno de Bánzer reorientó la política económica que había estructurado el gobierno de Juan José Torres, asignando una importancia fundamental a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera. Con ese objetivo, en diciembre de 1971 promulgó una ley de inversiones, que comprende una serie de incentivos tributarios directos dentro de un contexto general de fomento a la libre empresa y a la competencia.

Esta reorientación condujo al país a un agudo desequilibrio económico, que se manifestó en una devaluación de 68% del peso boliviano a fines de 1972, que pasó de 11.88 a 20 unidades por dólar.

Como resultado de la devaluación, el nivel general de precios mostró un rápido incremento. Tan sólo en el primer año se elevó 25%, por lo que las autoridades tuvieron que formular un reglamento sobre precios.

En 1972 el Gobierno otorgó un reajuste de salarios; empero, el alza generalizada de los precios, aunada al descontento popular, obligó al Gobierno a un nuevo reajuste, a mediados de 1973. Todo ello propició una vertiginosa alza en el costo de la vida, estimada en 300% para los primeros 28 meses de la gestión de Bánzer.

La evolución económica de Bolivia

durante 1974 se significó por el mayor dinamismo en algunos sectores, como los productores de servicios básicos, el comercio y las finanzas. En cambio, la minería experimentó una estancamiento sin precedentes y la agricultura tuvo un ritmo de crecimiento muy modesto. En este año, el producto interno bruto (PIB) alcanzó una tasa de expansión de 5.7 por ciento.

Durante 1974, el *quantum* de las importaciones creció notablemente, lo que reveló una creciente dependencia de suministros importados, tanto en bienes de consumo como en bienes intermedios y de capital. De esta manera, el coeficiente de importaciones en relación con el PIB, que en 1970 fue de 21%, en 1974 alcanzó un poco más del 26%. Para los analistas, dicha evolución tiende a agudizarse.

En cuanto al valor de las exportaciones, en 1974 tuvieron un crecimiento de 98.5%, respecto al año anterior, lo que se explica por aumentos de precios, ya que el *quantum* de los envíos disminuyó.

El aumento en el valor de las exportaciones permitió, a su vez, un crecimiento importante de los ingresos fiscales, razón por la que no se registró un déficit importante, a pesar de que aumentaron los gastos en casi 90% respecto al año anterior.

Para 1975, según los datos más recientes publicados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el PIB creció a una tasa anual de 4.1%, continuando así con la tendencia observada desde comienzos del decenio en curso. El crecimiento anotado fue el resultado del irregular comportamiento de los distintos sectores económicos.

En efecto, mientras que la agricultura mostró una fuerte recuperación, alcanzando un incremento de 6.7% respecto a 1974, la minería, que está considerada como la columna vertebral de la economía nacional, continuó su fase de estancamiento, con un descenso de 9.2%. En cambio, los demás sectores productores de bienes y servicios siguieron con su tendencia ascendente. En la industria el ritmo anual de crecimiento fue de 4.3% (4.2% en 1974); los servicios básicos tuvieron un aumento de 8.3% (6.0% en 1974) y en el renglón del comercio y las finanzas el ritmo de crecimiento fue de 8.5% (6.9% en 1974). El sector de la

construcción conservó un fuerte crecimiento: 13.5% (14% en 1974).

Las exportaciones mostraron una fuerte reducción, estimada en casi 20%. Los valores absolutos fueron 558 millones de dólares para 1974 y 449 millones para 1975. En cambio, las importaciones aumentaron casi 30%, pasando de 375 millones de dólares en 1974, a 485 en 1975. En el rubro de servicios netos no procedentes de factores se registró, asimismo, un incremento en el déficit, pasando de 89 a 125 millones de dólares. La balanza comercial tuvo un saldo negativo de 161 millones de dólares, que contrasta con el superávit de 91 millones registrado en el año anterior.

Por el lado de la balanza en cuenta corriente, el déficit fue de 199 millones de dólares, mientras que en 1974 registró un saldo positivo de 66 millones. Y, finalmente, la balanza de pagos, antes de la compensación, registró un saldo deficitario de 55 millones de dólares, frente a un saldo superavitario de 124 millones del año anterior.

Por otro lado, durante 1975, el Gobierno decretó el congelamiento de los sueldos y los salarios, al tiempo que rebajó los aranceles a la importación, lo que permitió una reducción de la tasa de inflación. De enero a julio, el incremento de precios al consumidor de bajos ingresos fue de 2.1 por ciento.

En octubre último, el Gobierno dio a conocer un decreto en el que se autorizaba un aumento de 150% en el precio de los carburantes, lo que movilizó a los trabajadores. Así, en los dos principales distritos mineros del país, Cataví y Siglo XX, ubicados a unos 300 km al sureste de La Paz, los mineros realizaron una enorme concentración popular en la que eligieron dirigentes sindicales, pasando por encima de una disposición oficial de noviembre de 1974 según la cual quedaban proscritas las actividades sindicales en el país.

Un par de días después, los trabajadores de la mina "Unificada" realizaron elecciones sindicales y, posteriormente, trabajadores fabriles, ferroviarios y de la construcción, siguieron aquella iniciativa.

En la concentración popular de la mina Siglo XX se emitió un programa de lucha, conocido como "El manifiesto de Siglo XX", el cual se convirtió en programa político, base para la unificación

de los grupos opositores al régimen. En dicho programa, además de rechazar el decreto que autoriza el alza en el precio de los combustibles, los trabajadores exigieron el reconocimiento de los sindicatos por las autoridades del Ministerio del Trabajo, así como la plena vigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos (FSTMB), las dos principales centrales obreras del país. Asimismo, plantearon la necesidad de un aumento general de sueldos y salarios proporcional al aumento en el costo de la vida, así como la defensa del patrimonio nacional y el rechazo de los planes del Gobierno que está entregando el hierro y el gas a Brasil, el petróleo a las compañías estadounidenses y europeas, y las minas y las empresas pertenecientes al sector público al capital privado, nacional y extranjero.

Para los observadores, la actitud asumida por el sector laboral significó una "quiebra del poder político del Gobierno del general Hugo Bánzer"; para el Gobierno fue solamente un acto de conspiración provocado "por los enemigos del régimen", por lo que respondió con medidas represivas que más que aliviar las tensiones las agudizaron.

A comienzos de 1976 el Gobierno denunció nuevamente un supuesto plan para derrocarlo por medio de la agitación laboral y política. Dicho plan, según afirmaron las autoridades, fue descubierto a raíz de un conflicto obrero-patronal en la fábrica de zapatos más importante del país.

Los obreros demandaban la reposición de los instrumentos de trabajo, la asistencia médica para los trabajadores, así como el pago quincenal de los salarios y las bonificaciones. El paro llevaba diez días y no tenía visos de una rápida solución. Para acabar con este foco de insurgencia, el Gobierno, a través del Ministro del Trabajo, señaló un plazo de 24 horas para reanudar las labores o autorizaba el despido masivo de los huelguistas. Los obreros persistieron en sus demandas, y 820 de los 860 que trabajaban en esa empresa fueron cesados sin el pago de los beneficios sociales correspondientes.

El general Juan José Torres envió sendos telegramas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunciando este hecho y señalando el peligro

de una "masacre blanca", es decir, una represión no sangrienta, que podría convertirse en una "masacre roja", como la ocurrida en enero de 1974, cuando 200 trabajadores campesinos fueron asesinados cuando reclamaban por el alza indiscriminada en el costo de la vida.

En el interior, como respuesta a la actitud del Gobierno, la FSTMB, que agrupa a más de 25 000 trabajadores del subsuelo, emitió una declaración de apoyo a sus compañeros despedidos, al tiempo que se inició un paro de 48 horas en el yacimiento estañífero Siglo XX, como un primer paso para la huelga general en el país. Días después, estalló la huelga general, tanto en empresas estatales como en privadas.

Paralelamente, los dirigentes sindicales anunciaron que, de no resolverse la reincorporación de los trabajadores cesados, las organizaciones obreras boicotearían la venta de calzado en todos los distritos mineros. Al mismo tiempo, los estudiantes y los profesores de tres universidades se sumaron a la actitud sindical, efectuando acciones de apoyo en las calles de La Paz y suspendiendo las actividades universitarias.

En los últimos días de enero la agitación social cobró dimensiones insospechadas y el Gobierno ordenó la reinstalación de los obreros despedidos. Esta disposición fue considerada por los analistas como un serio revés político, que ponía en peligro la alianza tradicional del Gobierno con los empresarios, ya que éstos se negaban a aceptar este tipo de soluciones.

En los primeros días de febrero, el Ministro del Interior emitió un escueto comunicado en el que anunció la expulsión a Paraguay del ex-ministro de Industria y Comercio, coronel Miguel Ayoroa, y de seis estudiantes universitarios, "por haberseles comprobado trajes subversivos".

A mediados de febrero la policía allanó la Universidad de San Andrés y, después de librar una batalla a tiros con los estudiantes, aprehendió a 247 universitarios, entre los que se encontraban varios profesores. Las clases fueron suspendidas indefinidamente por el Gobierno, aduciendo que tal medida devolvería la tranquilidad al país. El presidente Bánzer advirtió que "todos los centros donde impera el desorden serán cerrados".

Dos días después, el Gobierno cerró las universidades de Sucre, Cochabamba y Oruro. La poderosa FSTMB censuró el cierre de las universidades y convocó a un paro general de 24 horas para el día 21 de febrero.

El Gobierno, por su parte, acusó al ex-presidente Juan José Torres de ser el instigador de la agitación. El anuncio fue hecho por el Ministro del Interior, quien afirmó que los disturbios eran parte de un plan subversivo "preparado desde el exterior por los adversarios del régimen militar boliviano". Añadió que las radio-difusoras mineras habían difundido una proclama de Torres, instando al derrocamiento del gobierno de Bánzer.

A su vez, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que el ex-mayor Rubén Sánchez era buscado intensamente por las autoridades por estar vinculado con el clandestino Ejército de Liberación Nacional.

El comunicado del Ministro del Interior afirma que entre los complicados en el plan subversivo están el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y otros grupos de izquierda, así como algunos extranjeros.

Posteriormente, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), surgido del Ejército de Liberación Nacional que organizó el *Che* Guevara en 1967, hizo un llamado para salvar la vida de más de 20 militantes presos, y que "son salvajemente torturados". El PRT identificó, además, a los principales torturadores, a cuyo cargo están los presos políticos. Por otra parte, se informó que Bánzer deportó a un grupo de opositores a Chile. Voceros bolivianos afirmaron que entre los deportados figuraban dirigentes universitarios y un ministro del régimen de Torres.

Después de varios días de negociaciones con los estudiantes, el Ministerio del Interior afirmó que el Gobierno decidió acceder a las demandas estudiantiles, en momentos en que la situación general tendía a agravarse. Los estudiantes demandaban libertad para elegir democráticamente a la representación estudiantil y la excarcelación de 53 estudiantes.

El 1 de mayo último casi 500 delegados de los trabajadores mineros bolivianos inauguraron en Corocoro, un distrito minero situado a 100 km de La Paz, su XVI Congreso Nacional, desafiando la

prohibición gubernamental contra este acto. Sin embargo, ante la decisión de la FSTMB, el Gobierno cedió a última hora, como una muestra más "de la amplitud con que el Gobierno trata los problemas laborales", según declaró el ministro del Trabajo, coronel Mario Vargas.

Al concluir la reunión, los trabajadores reunidos emitieron un documento, denominado "Plataforma de Lucha", en el que se rechaza "toda intromisión paternalista, vertical o corporativa en los sindicatos, así como en la designación de los coordinadores laborales". Asimismo, se exige un aumento general de sueldos y salarios para el sector minero, y un salario diario mínimo de 80 pesos bolivianos, equivalentes a cuatro dólares. Esta exigencia supone que la minería estatal y la privada aumentarían sus pagos 160%; además, de no concretarse esta medida en el plazo de un mes, los congresistas decidieron por unanimidad convocar a una huelga general en ese vital sector de la economía boliviana.

El 1 de junio, pocos días antes de que venciera el plazo fijado por el cónclave minero para hacer estallar la huelga nacional en todo el sector, un nuevo suceso dio pie para elevar la temperatura del ya caldeado ambiente político de Bolivia.

En efecto, ese día el ex-presidente Juan José Torres fue secuestrado en Buenos Aires, donde estableció su residencia en 1973, bajo la protección del gobierno de Héctor J. Cámpora. Dos días después, el 3 de junio, su cadáver fue encontrado a 100 km de la capital argentina.

El asesinato provocó una intensa ola de indignación en diversas partes del mundo y en el interior de Bolivia. En efecto, en varios países estadistas y dirigentes políticos y sindicales, lo mismo que intelectuales y estudiantes, expresaron su repudio al crimen. En Buenos Aires, los habitantes bolivianos de las villas de emergencia izaron a media asta las banderas de su país, en señal de duelo.

En el interior de Bolivia, la protesta popular adquirió una magnitud inusitada: 35 000 mineros paralizaron el trabajo y los universitarios suspendieron sus actividades.

Ese mismo día, el gobierno de Bánzer

emitió un comunicado en el que se sumó al duelo nacional y dispuso un programa oficial de honras fúnebres, y resolvió la repatriación inmediata de los restos del victimado ex Presidente. Empero, según señalaron algunas fuentes, el Gobierno propuso a la familia de Juan José Torres que se velara el cadáver bajo control policial y que el entierro se realizara a horas intempestivas.

Estas propuestas llevaron a la FSTMB, a los universitarios y a la familia del ex-mandatario, a rechazar el ofrecimiento del gobierno de Bánzer y a éste a prohibir el retorno del cuerpo, a la vez que arrestaba a tres ex-ministros que retornaron al país, haciendo caso de un ofrecimiento del propio general Bánzer, para que se repatriaran aquellos exiliados que se sintieran en peligro.

Por su parte, el Gobierno argentino negó en un principio el secuestro del general Torres; sin embargo, una vez conocido el crimen, libró al gobierno boliviano de toda responsabilidad en lo ocurrido, a pesar de la falta de indicios que tenían los servicios de seguridad sobre este asesinato. Al mismo tiempo, fijó un plazo de cuatro horas para que el cuerpo fuera enterrado. En esas circunstancias, los familiares acudieron a la embajada mexicana en ese país para que los restos del ex-mandatario fueran sepultados en México para trasladarlos a su tierra natal cuando existan condiciones democráticas.

A partir de entonces la situación interna de Bolivia ha adquirido tales características, que los especialistas afirman que podría desembocar en "sucesos imprevistos".

En efecto, el 7 de junio miles de obreros bolivianos declararon 15 días de luto como protesta por el asesinato de Torres y por la actitud del Gobierno de negarse a repatriar sus restos. Unos 35 000 mineros suspendieron sus labores y los universitarios de La Paz realizaron mítines en las calles. Para controlar estos actos de protesta, el Gobierno ordenó a las fuerzas armadas que tomaran las medidas extremas para "sofocar el ambiente de subversión existente en el país". Mientras tanto, el Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, anunció la suspensión temporal de las labores académicas en las universidades estatales de La Paz, Oruro y Cochabamba, por considerar que "existe una franca actitud subversiva de parte de los grupos

activistas que operan en esas casas de estudio".

El 9 de junio, el Gobierno decretó el estado de sitio en el país, "dado el clima de subversión". El estado de sitio fue decretado por 90 días y el Ministro del Interior informó que tropas del ejército ocuparon diversos distritos mineros. Simultáneamente, el Gobierno anunció la detención de 19 personas relacionadas con el movimiento sindical minero; entre ellas estaba su máximo dirigente, así como otros líderes políticos de los partidos izquierdistas.

El gobierno manifestó que la ocupación militar de las minas "tiene la finalidad de garantizar la tranquilidad pública en esos centros". "Por su parte, los trabajadores afirmaron que con esta actitud el Gobierno busca intimidarlos para que posterguen sus gestiones de aumento salarial.

Cuando las tensiones aumentaron, el presidente Bánzer prometió un aumento del 25% en los salarios, el primero tras dos años de congelación. Esta promesa fue considerada por los trabajadores como un recurso aparente, destinado a calmar la agitación social; indicaron que la cuestión de los salarios debía ser negociada y que para iniciar el diálogo exigían el retiro de las fuerzas militares y la liberación de sus dirigentes. El aumento de salarios exigido por los trabajadores es de 200 por ciento.

Días después, el Gobierno declaró "zona militar" las áreas de las minas paralizadas y ofreció un nuevo aumento de 30% en los salarios de los mineros que volvieran al trabajo, haciéndolo efectivo para aquellos que no habían acudido a la huelga. Sin embargo, según señalaron diversas fuentes, la promesa presidencial no quebrantó la unidad de los trabajadores. La situación se agravó aún más cuando se supo que dirigentes políticos y sindicales habían sido deportados a Chile, lo cual hizo que un amplio sector de los trabajadores fabriles se sumara a la huelga minera.

Este recrudecimiento de las tensiones ha dado lugar a que las opiniones se dividan en los círculos empresariales y eclesiásticos, lo mismo que entre los militares, ya que unos opinan que es necesario aplicar mayores medidas de fuerza para controlar la situación, mientras que otros, por el contrario, se pronuncian por las negociaciones, para evi-

tar derramamientos de sangre y que la crisis llegue a extremos impredecibles.

Mientras tanto, fuertes bien informadas afirman que en el Ejército existe una clara división, debido a las severas críticas manifestadas en diversos sectores de la oficialidad por las negociaciones secretas entre Bánzer y Pinochet sobre una salida al mar para Bolivia.

En agosto de 1975, el gobierno de Bánzer hizo entrega al Gobierno chileno de una propuesta sobre el acceso de Bolivia al mar. En ella se pidió un corredor con soberanía y costa marítima al norte del puerto de Arica, paralelo a la frontera chileno-peruana. Además, se solicitó la vinculación de este corredor al puerto mencionado, contando con un régimen de autonomía y un enclave soberano en otro puerto habilitado, pudiendo estar en Iquique, Pisagua o Antofagasta.

El 19 de diciembre de 1975 la cancillería chilena entregó una contrapropuesta al embajador boliviano en Santiago. En ella el gobierno de la Junta Militar rechazó el enclave y la vinculación del posible corredor con el puerto de Arica. En cuanto a la propuesta del corredor, el régimen chileno aceptaba las negociaciones siempre y cuando Bolivia lo canjeara por algún territorio.

El 22 de diciembre, Hugo Bánzer manifestó que su gobierno consideraba la contrapropuesta chilena "como una base global aceptable de negociaciones". Sin embargo, la aceptación de Bánzer fue rechazada por los bolivianos.

Para dar una idea aproximada, la propuesta chilena supone que para que Bolivia tenga un corredor de 720 km<sup>2</sup>, debe entregar a cambio tierras con una superficie total de 3 900 km<sup>2</sup> en las que se presume existen grandes yacimientos de hidrocarburos.

El Gobierno boliviano, presionado por el rechazo general admitió haber cometido errores en la primera fase de las negociaciones con el régimen chileno. Sin embargo, según informó el diario *Los Tiempos*, de Cochabamba, el jefe del régimen boliviano declaró "no estar pesimista" respecto al resultado final de las conversaciones.

El rotativo precisa que Bánzer está decidido a que en la segunda fase de las negociaciones nadie cometa errores y dice que "amenaza con cesar al primer

funcionario que falle, incluyéndose a él mismo”.

Esta entrevista fue realizada poco después de que Bánzer volviera de una gira por las guarniciones militares del país, buscando apoyo para la contraoferta chilena. Sin embargo, la protesta de algunos sectores militares impidió que siguiese adelante. A raíz de estas protestas el régimen de Bánzer transfirió a la reserva activa a varios altos oficiales de las fuerzas armadas bolivianas, entre los que destacan los ministros del Exterior y de Planeamiento y Coordinación, generales Alberto Guzmán Soriano y Juan Lechín Suárez. Cabe apuntar que insistentes versiones señalaron a Lechín Suárez como el sustituto de Bánzer, por lo que se presume habría cierta rivalidad entre ambos militares.

Además, pasaron a la reserva los generales Juan Ayoroa y Enrique Gallardo y el mayor Gary Pardo. El primero y el último estuvieron involucrados en el frustrado golpe militar de 1974. También suspendieron del servicio activo al exembajador en Francia, Joaquín Zenteno Anaya, recientemente asesinado en París; al general Jesús Via Solís, actual gerente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), y a otros altos oficiales.

En estas circunstancias, existe incertidumbre sobre el futuro inmediato de Bolivia. Una de las opiniones más difundidas es la que prevé una posible apertura de tipo democrático, para disminuir la tensión sociopolítica y buscar un nuevo equilibrio entre los sectores sociales para hacer avanzar al país. □

## COSTA RICA

### De nuevo Figueres

Las recientes declaraciones del ex-presidente José Figueres<sup>1</sup> plantean, a juicio de analistas y observadores de la realidad costarricense, las primicias de una nueva fase de la lucha por el poder.

El hecho de que las elecciones presidenciales hayan de celebrarse en febrero de 1978 agrega un mayor dramatismo a

las pugnas desatadas, principalmente en el seno del Partido de Liberación Nacional. Las decisiones con respecto a los candidatos para la primera magistratura han de tomarse a fines del corriente año y restará, luego, un largo y conmovido año de lucha electoral, mientras se cumplen o se intentan cumplir las anunciadas reglas de austeridad económica en las que se apoya la gestión del presidente Oduber, en el último tramo de su mandato.

Desde su tan sólo aparente retiro, José Figueres se proyecta al primer plano de la escena política con sus categóricas afirmaciones que contienen, en verdad, una ácida crítica del sistema de gobierno y apuntan, sin desviaciones, al modelo desarrollista y redistributivo que caracteriza, mayormente, la política económica del actual mandatario:

“1. En Costa Rica hay un sistema de gobierno lleno de deficiencias. No hay quien mande y hay una falta de autoridad tremenda.

“2. Aquí puede venir un sacudimiento violento —y ya estuvo a punto de haberlo cuando querían darle juego a la Casa Presidencial—. Los sindicatos van a agarrar el poder y después los van a hachar con un Frank Marshall moderno que ponga a todo el mundo a su manera. Lo menos malo que nos puede pasar es que nos quedemos como estamos.

“3. La corrupción está terrible. Pero este tema es muy delicado para mí, porque algunos compañeros de mucha importancia tienen la culpa de lo que está pasando, pues se están enriqueciendo ilícitamente después de la Guerra del 48, que nos dejó 2 000 muertos en la espalda.

“4. No se puede, en las condiciones de hoy de Costa Rica, hacer un gobierno bueno sin un período provisorio. Se necesitan poderes especiales. Si yo aceptara ser candidato, sería a condición de que en el voto vayan los poderes extraordinarios.

Conviene recordar, como lo hace el reportero de *Excelsior*, que según el artículo 132 de la Constitución de Costa Rica, reformado en 1968, durante la presidencia de José Joaquín Trejos, es imposible la reelección presidencial. De ahí que la pretensión de Figueres requiera una reforma constitucional que, según una encuesta realizada entre 55 de los 57

diputados de la Asamblea Nacional, tiene muy escasas posibilidades de realizarse (sólo nueve legisladores se manifestaron en favor de ella, mientras que el resto se mantuvo indeciso o se pronunció claramente en contra. Se requiere un mínimo de 38 votos para aprobar una reforma a la Constitución). No obstante, los concededores de la realidad política de Costa Rica no descartan la posibilidad de la reforma, por más distante que ahora pueda reputarse, en vista de la personalidad de Figueres. En efecto, “muchas gente piensa que el héroe de la Guerra del 48 es capaz de lograr cualquier objetivo que se proponga”. A ese respecto, un reportero político de Radio Centroamericana le comentó al periodista mexicano lo siguiente: “se le teme porque cuando se propone algo lo hace, aunque se considere que ya perdió un 60% del poder que tenía”.

Las fuerzas económicas y sociales susceptibles de agruparse en torno de la figura de Figueres no deben subestimarse. Se ha dicho que su prestigio de líder popular ha ido decreciendo con el transcurso de los años; se ha llegado a establecer el porcentaje de ese decrecimiento, pero, en verdad, en una materia como ésta, la aritmética no parece ser el instrumento adecuado para medir el prestigio político.

Puede señalarse, a título de ejemplo, que el sector cafetalero se constituiría en el sostén principal de la candidatura de Figueres. Cabe agregar que el apoyo de ese sector llegaría a ser, en la coyuntura actual de las relaciones económicas, poco menos que decisivo para imponer a la opinión pública la figura del próximo presidente de Costa Rica.

Las apuntadas declaraciones de Figueres no son sorprendentes. Sin embargo, se dan a conocer en momentos en que se enciende la pugna entre los precandidatos en el seno del Partido de Liberación Nacional. De ahí, entonces, las referencias que hace el propio Figueres a la inviabilidad política de la candidatura de Luis Alberto Monge. Este aparecía, hasta ahora, como el más serio aspirante a la presidencia de la República.

En el Partido de Liberación Nacional han surgido otras dos figuras con aspiraciones y relieves que deben tenerse en cuenta en el momento de la decisión final:

Gonzalo Facio, actual Ministro de Re-

1. Al semanario *Gente y Paisajes*, de San José de Costa Rica, citadas en *Excelsior*, de la ciudad de México, por su enviado Luis Gutiérrez R., el 20 del presente mes.

laciones Exteriores, puede concitar el apoyo de una parte del sector cafetalero y contar con el aval de los sectores sociales y económicos vinculados al comercio con Estados Unidos.

Carlos Manuel Castillo, primer Vicepresidente y Ministro de la Presidencia, habitualmente definido como "técnico", es la otra figura de Liberación Nacional que aspira a la postulación.

Por su parte, en el seno del Partido de Unificación Nacional parece que se ha llegado a una decisión final y se proclamaría a su Secretario General Guillermo Villalobos Arce.

En los llamados "partidos menores" se gesta la idea de constituir un frente político, en el entendido de que esta fórmula de coalición se perfila como la vía más real para adelantar un paso en el camino de la aproximación al poder.

Tal, a grandes rasgos, el panorama político que ofrece Costa Rica en el momento actual, a veinte largos y difíciles meses del acto electoral.

Los observadores señalan que la vida democrática del país, con sus peculiaridades que la hacen excepcional en el contexto de la región, ha atravesado sin grandes tropiezos las contingencias de la crisis económica.

Sin embargo, los mismos observadores admiten que este rasgo positivo del régimen político puede opacarse ante la magnitud de una crisis que afecta en su esencia misma al modelo redistributivo de la política económica. Son los márgenes de maniobra de dicha política los mayormente afectados. Son ellos los que han sufrido un considerable estrechamiento al continuar operando con renovada energía los factores permanentes de la crisis.

En efecto, si se examinan los principales rubros de la balanza de pagos de 1975 se comprueba que el signo negativo es el rasgo casi permanente. Costa Rica pudo enfrentarse a la crisis del petróleo con el recurso del endeudamiento externo: utilizó un préstamo de 16.5 millones de dólares facilitado por el Gobierno de Venezuela y usó del crédito especial concedido por el Fondo Monetario Internacional.

El rubro de importaciones, especialmente el sector de bienes de consumo

duradero, se ha duplicado en el período 1972/75, y puede afirmarse que las medidas de política económica implantadas con el propósito de contraer el ritmo de las importaciones no han tenido el efecto deseado. Esto, a juicio de los analistas, expresa el comportamiento de la clase media cuyo "consumismo" es estimulado por las organizaciones financieras de crédito, que desarrollan impetuosamente un verdadero mercado paralelo, en contradicción real con las directivas de la política estatal.

El déficit fiscal, uno de los más serios problemas de Costa Rica a lo largo de muchos años, oscilaría, según las previsiones del Gobierno, entre 550 y 700 millones de colones para el año en curso.

Agréguese que el proceso inflacionario, si bien contenido durante 1975, es el mayor de la región, y opera, como es lógico, de un modo negativo en el esquema de la política económica del presidente Oduber.

El endeudamiento externo público y privado se elevó considerablemente en el curso de 1975: alcanzó la suma de 652.5 millones de dólares, frente a 547.6 millones de dólares en el año 1974.

Se estima que el servicio de la deuda externa absorbió durante 1975 una proporción no menor del 25% de los ingresos recibidos por concepto de exportaciones.

A los obstáculos de sobra conocidos que inhiben el proceso integracionista de la región centroamericana, se suman, para el caso de Costa Rica, la poca o nula competitividad de sus productos no tradicionales en el mercado regional y el decaimiento de la actividad económica en los países adyacentes.

En conjunto, las exportaciones de tales productos hacia la región mantuvieron en 1975 valores a precios corrientes similares a los del año anterior. Así, uno de los factores de mayor efecto en la dinámica industrial pierde su influencia decisiva y constituye una de las causas principales de la crisis que afecta al país.

Es cierto que con el propósito de fortalecer la base productiva de la industria se han emprendido por parte del Gobierno un conjunto de acciones para desarrollar nuevas industrias, en un in-

tento de diversificar las ventas al exterior y crear nuevos empleos.

En este sentido, se realizaron gestiones destinadas a obtener la asistencia técnica de Noruega y la financiera de Venezuela, para concretar el proyecto de producción de aluminio. Los proyectos previstos para el sector industrial (bauxita, cobre, refinación y transporte de petróleo y derivados) se mantienen todavía a nivel de estudios y las gestiones se encaminan a la obtención de asistencia técnica y financiera.

En todos los análisis de la realidad económica y social de Costa Rica se subraya con vigor un concepto que aparece como común denominador: el concepto de austeridad. Y ello, más allá del reconocimiento que se hace del efecto que sobre la economía puedan tener los precios muy elevados obtenidos por el café, dice bien a las claras cuál es la magnitud de los factores permanentes de la crisis y cuál la incidencia de los mismos en el proceso social y político.

La exigencia de austeridad se dirige, principalmente, al gasto público. Pero también se exige de una clase media cuyo consumismo introduce un desequilibrio permanente en la balanza comercial.

No obstante, como señalan los analistas, la austeridad no es ni puede ser la panacea universal. La experiencia histórica demuestra que un remedio de esta naturaleza, si se aplica consecuentemente, engendra resistencias que de inmediato se trasladan al campo político. Y ya en esta esfera, los comportamientos no pueden predecirse con facilidad y las sorpresas pueden empezar a producirse.

La lucha política que caracteriza en la actualidad el caldeado clima de Costa Rica se desarrolla sobre el telón de fondo de una crisis económica de rasgos muy definidos. Del seno mismo de la crisis surgirán los comportamientos específicos de los sectores sociales. Son ellos, en función de sus propios intereses o de los que conciben como tales, los que apoyarán a una o a otra de las candidaturas, para consagrar finalmente, en febrero de 1978, al primer magistrado de la nación. Empero, el camino que falta por recorrer desde el hoy de 1976 hasta el segundo mes de 1978 es largo y difícil. Para muchos —opinan los analistas—, las previsiones pueden no ser tales y las esperanzas resultar frustráneas. □